



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 47
MAYO 2026

Contenido

TEMA DEL MES: A DÍAS DE LA PRIMERA CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL.....	3
CHILE BAJO LA LUPA: RETENCIÓN DE APOYO AL PRESIDENTE KAST	5
ALERTA CONCEPTUAL: RESISTENCIA ESTRATÉGICA: VETO DE FACTO Y AUTORÍA DIFUSA	8

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

A DÍAS DE LA PRIMERA CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL

El inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha estado marcado por un escenario de elevada conflictividad política, una agenda económica de alto alcance y dificultades asociadas al proceso de instalación administrativa y comunicacional. A pocas semanas de iniciada la nueva administración, el país enfrenta un contexto de fuerte polarización política y creciente tensión institucional, donde el Ejecutivo busca avanzar en un ambicioso Plan de Reconstrucción Nacional orientado a impulsar el crecimiento económico, fomentar la inversión privada, generar empleo, reconstruir las zonas afectadas por los incendios y reducir barreras burocráticas que dificultan el dinamismo económico.

En paralelo, la oposición ha desplegado una estrategia política destinada a ralentizar o bloquear parte relevante de la agenda gubernamental. Esta dinámica se expresa tanto en el plano discursivo como legislativo, mediante el uso intensivo de herramientas procedimentales, indicaciones masivas, reservas de constitucionalidad y mecanismos de dilación parlamentaria. El objetivo político subyacente parece orientarse a debilitar la capacidad de gestión del Ejecutivo y aumentar los costos de implementación de sus principales reformas. En este contexto, la viabilidad de la agenda gubernamental dependerá en gran medida de la capacidad del oficialismo para construir acuerdos parciales y articular mayorías legislativas en un Congreso altamente fragmentado.

Durante sus primeras nueve semanas, el Gobierno ha mostrado una combinación de prioridades políticas definidas y señales de firmeza en la toma de decisiones, aunque también dificultades en su proceso de instalación. Entre estas últimas destacan problemas de coordinación comunicacional, discrepancias públicas entre autoridades y diferencias entre partidos de la coalición oficialista. A ello se suma una creciente presión sobre el Ministerio de Seguridad, particularmente respecto de la necesidad de presentar un plan de acción concreto que permita materializar los compromisos de campaña vinculados a seguridad pública, crimen organizado y control migratorio, áreas consideradas centrales para la legitimidad política del gobierno.

Las encuestas de opinión reflejan un desgaste parcial en los niveles de apoyo ciudadano hacia la nueva administración. El domingo 17 de mayo, los estudios de opinión registraron niveles de aprobación del 36% en Cadem y 38% en Critería. No obstante, la composición de dicho apoyo resulta particularmente relevante: quienes respaldan al Gobierno lo hacen por un abanico amplio de opciones, principalmente por atributos asociados a liderazgo del Presidente, crecimiento económico, control de la inmigración irregular y la seguridad; mientras que la desaprobación se concentra mayoritariamente en materias económicas, especialmente en torno a la reforma tributaria, las políticas de ajuste en el tema de los combustibles y la reducción del gasto público.

Desde la oposición pueden identificarse dos dinámicas complementarias. Por una parte, sectores de izquierda mantienen una posición de rechazo ideológico frontal frente al gobierno y sus principales lineamientos programáticos. Por otra, en el Congreso se desarrolla una estrategia más pragmática orientada a limitar el avance legislativo del Ejecutivo mediante herramientas institucionales de veto y obstrucción. Esta conducta se sostiene sobre el supuesto de que la fragmentación parlamentaria permite impedir la consolidación de acuerdos amplios y, al mismo tiempo, contribuir al desgaste político del Gobierno. Sin embargo, la oposición también enfrenta debilidades relevantes, entre ellas una significativa fragmentación interna y dificultades para articular propuestas programáticas coherentes que trasciendan la lógica reactiva y de bloqueo.

El impacto de este escenario sobre la convivencia democrática es significativo. En primer lugar, se profundiza la erosión de las prácticas de moderación institucional, debido al uso sistemático de mecanismos de bloqueo político sin costos claros de responsabilidad pública. Esta dinámica deteriora las capacidades de gobernabilidad y dificulta la construcción de acuerdos mínimos para enfrentar problemas prioritarios. En segundo término, aumenta la desafección ciudadana hacia el sistema político, particularmente cuando la percepción pública es que las instituciones no logran resolver problemas concretos ni establecer responsabilidades políticas claras frente a los conflictos.

El actual momento combina tensiones estructurales de larga data —como la baja confianza en partidos e instituciones, la polarización ideológica y la confrontación mediática— con nuevas formas de obstrucción institucional propias de un sistema político fragmentado. En este contexto, la próxima Cuenta Pública presidencial del 1° de junio representa un punto de inflexión relevante tanto para el Gobierno, como para la oposición.

Para el Ejecutivo, esta instancia constituye una oportunidad para cerrar la etapa de instalación y proyectar una agenda centrada en resultados concretos y verificables. Ello requiere traducir el Plan de Reconstrucción Nacional en objetivos sectoriales específicos, con metas, plazos e indicadores públicos que permitan evaluar avances. Asimismo, resulta prioritario fortalecer las políticas de seguridad pública y control de la inmigración, áreas donde la ciudadanía mantiene altas expectativas y donde el Gobierno concentra buena parte de su legitimidad política.

En términos tácticos, el discurso presidencial podría incluir un reconocimiento explícito de las dificultades propias del proceso de instalación y un compromiso claro de corrección y mejora. En el ámbito legislativo, el Ejecutivo podría proponer una estrategia de acuerdos parciales y negociaciones temáticas que permitan avanzar gradualmente en reformas prioritarias, reduciendo los incentivos a la confrontación total.

Mensajes centrados en ideas como la capacidad de escuchar, corregir y ejecutar políticas basadas en evidencia pueden contribuir a recuperar confianza entre los grupos donde el apoyo al Gobierno ha mostrado mayores niveles de erosión. La ciudadanía parece demandar no solo liderazgo político, sino también eficacia administrativa, capacidad de gestión y resultados concretos frente a problemas urgentes.

Por su parte, la oposición enfrenta el desafío de definir si mantendrá una estrategia centrada principalmente en el bloqueo institucional o si avanzará hacia una lógica de competencia programática basada en propuestas alternativas de política pública. La forma en que resuelva esta tensión tendrá efectos relevantes tanto sobre la estabilidad política como sobre la calidad del debate democrático en los próximos meses.

En definitiva, el escenario político actual exige transitar desde una lógica de confrontación permanente hacia una gobernanza basada en resultados verificables, responsabilidad política y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La capacidad del sistema político para reconstruir acuerdos mínimos, fortalecer la confianza institucional y responder a las demandas ciudadanas será determinante para reducir la polarización y garantizar condiciones adecuadas de gobernabilidad en el corto y mediano plazo.

CHILE BAJO LA LUPA

RETENCIÓN DE APOYO AL PRESIDENTE KAST

Para evaluar la evolución del apoyo presidencial durante los primeros 65 días de Gobierno, se construyó un indicador de aprobación retenida. Este mide qué proporción del respaldo inicial mantiene el Presidente José Antonio Kast en cada medición posterior, tomando el 57% registrado al inicio del mandato como base equivalente a 100%. De esta forma, cada nivel posterior de aprobación se expresa como porcentaje de ese apoyo original.

Esto permite observar la trayectoria del apoyo presidencial en función de cuánto respaldo logra retener y cuánto pierde respecto del 57% de aprobación inicial¹, el nivel más alto registrado por un Presidente en el inicio de los últimos cuatro gobiernos. A los 30 días, el Presidente Kast conservaba un 73,7% de ese apoyo inicial, equivalente a 42% de aprobación². A los 60 días, la retención descendió a 63,2%, correspondiente a una aprobación de 36%³. Lo anterior implica una caída importante de su base inicial de apoyo en un período de tiempo acotado y cuyo ritmo de caída es indicativo de una tendencia que merece consideración.

Dónde se sostiene, o erosiona, el apoyo presidencial

Para analizar la composición del electorado, se utilizó Cadem Plaza Pública del 24 de abril, que es la última medición disponible con la pregunta de aprobación presidencial desagregada por nivel socioeconómico, edad, región de residencia e identificación política. A partir de esta encuesta, la aprobación de José Antonio Kast se estructura en tres grupos diferenciados. Primero, su núcleo duro, que mantiene su apoyo al Gobierno, compuesto por la derecha que retiene un 93,3% de su apoyo original (de 89% a 83%), el electorado que votó por Kast en segunda vuelta con 90% (de 90% a 81%) y los mayores de 55 años con 87,1% (de 62% a 54%).

El segundo grupo experimenta una erosión moderada pero contenida. Está compuesto por las mujeres con 80% de retención (de 45% a 36%), los residentes de regiones con 81,1% (de 53% a 43%), el centro político con 83,3% (de 42% a 35%), el nivel socioeconómico (NSE) medio con 84% (de 50% a 42%) y el NSE alto con 84,9% (de 53% a 45%).

El daño más crítico ocurrió en el tercer grupo entre marzo y abril, donde los menos ideológicamente comprometidos experimentaron caídas severas. Los no votantes Kast de la segunda vuelta presidencial retienen apenas 51,4% (de 35% a 18%), seguidos por los jóvenes con 75% (de 36% a 27%), la Región Metropolitana con 75,5% (de 53% a 40%), los independientes con 77,5% (de 40% a 31%) y los adultos de 35 a 54 años con 79,2% (de 53% a 42%).

La asimetría narrativa: por qué lo económico pesa más en el rechazo que en el apoyo

Al profundizar en los datos, la encuesta del 8 de mayo consulta las principales razones para aprobar o rechazar al mandatario⁴. Las respuestas evidencian que el respaldo y la oposición no se construyen bajo la misma lógica, lo cual incide en cómo se comprende la variación en los indicadores generales de aprobación y desaprobación de la figura del Presidente.

¹ Plaza Pública Cadem 653 (13 de marzo)

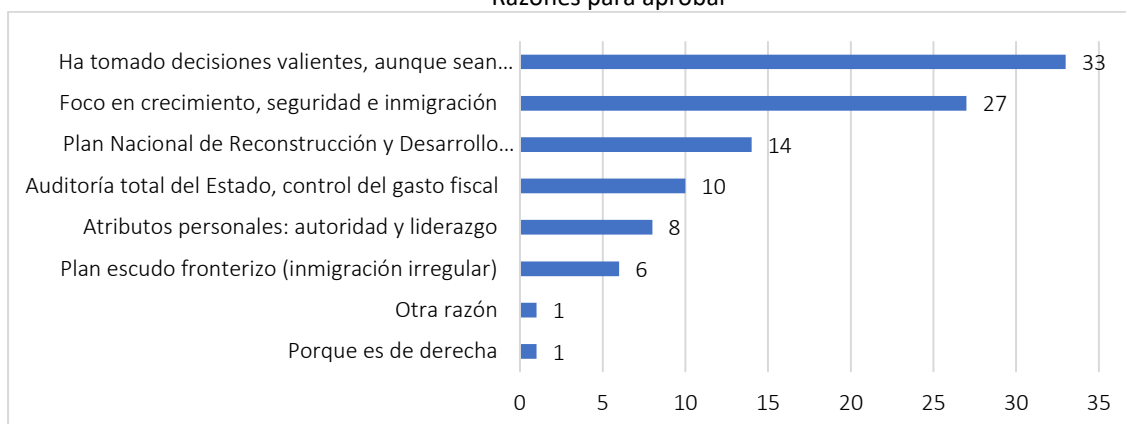
² Plaza Pública Cadem 653 (24 de abril)

³ Plaza Pública Cadem 655 (17 de mayo)

⁴ Plaza Pública Cadem 654 (8 de mayo)

Aprobación dispersa, desaprobación concentrada

Gráfico N°1
Razones para aprobar



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Plaza Pública 654, Cadem (8 de mayo).

En la aprobación, las razones se distribuyen de forma amplia y sin que ninguna domine. "Decisiones valientes" lidera con 33%, seguida por "foco en crecimiento, seguridad e inmigración" (27%), "Plan de Reconstrucción" (14%) y "auditoría del gasto" (10%). Los que aprueban valoran temas distintos: liderazgo, programa de gobierno, economía-gasto fiscal e inmigración. La base de apoyo no tiene ancla dominante y las razones económicas suman apenas 24%.

Gráfico N°2
Razones para rechazar



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Plaza Pública 654, Cadem (8 de mayo).

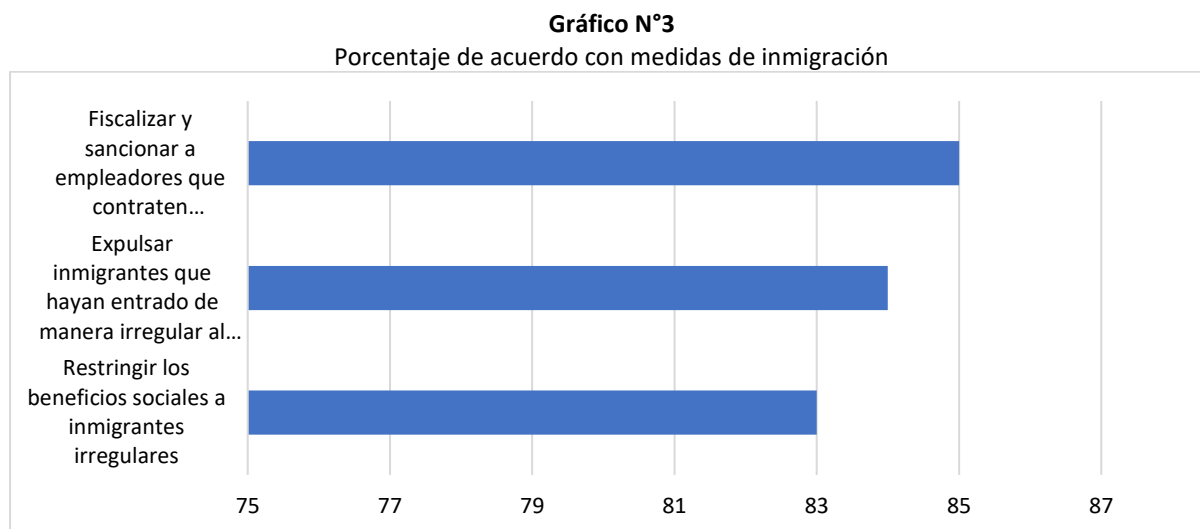
En la desaprobación, la estructura es opuesta. Un 57% de quienes desaprueban a Kast identifica un tema económico como su razón principal de rechazo. "Reforma tributaria" lidera con 32%, "recortes del gasto fiscal" (15%), seguida por "aumento del precio de los combustibles" (10%).

Un tema transversal para los chilenos: inmigración

La encuesta Cadem del 17 de mayo, confirma que migración y control fronterizo siguen siendo áreas donde el Gobierno mantiene una ventaja narrativa relevante⁵. Una amplia mayoría declara conocer el Plan Escudo Fronterizo (92%) y un 57% se manifiesta a favor de la iniciativa, reforzando que el control migratorio irregular continúa siendo una de las agendas con mayor legitimidad pública para el

⁵ Plaza Pública Cadem 655 (17 de mayo)

Ejecutivo. Más aún, el gráfico a continuación muestra la posición mayoritaria de la población frente a distintas medidas vinculadas a inmigración y control fronterizo.



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Plaza Pública 655, Cadem (17 de mayo).

Los resultados de la encuesta reflejan un amplio consenso ciudadano en torno al control y la sanción de la inmigración irregular, destacando un respaldo superior al 80% a medidas como la sanción a empleadores que contraten personas en situación irregular, la expulsión de quienes ingresan por pasos no habilitados y la restricción de beneficios sociales.

Perspectiva general

A nueve semanas del inicio de su mandato, el Presidente Kast mantiene un núcleo de apoyo cohesionado, particularmente entre los sectores más identificados políticamente con la derecha y entre quienes votaron por él en segunda vuelta. Sin embargo, la caída de 21 puntos en aprobación entre marzo y mayo -de 57% a 36%- muestra una erosión significativa en los segmentos menos ideologizados, especialmente independientes y jóvenes.

Más que un problema de cohesión interna, el principal desafío del Ejecutivo parece estar en recuperar legitimidad entre los sectores moderados y de menor identificación política, donde se ha concentrado el deterioro más acelerado de apoyo durante las primeras semanas de Gobierno.

La composición interna de la aprobación y la desaprobación revela una asimetría, mientras el respaldo a Kast se distribuye en múltiples dimensiones -liderazgo, seguridad, reconstrucción, control migratorio y orden fiscal-, el rechazo se concentra de manera mucho más definitiva en el ámbito económico, convirtiendo este frente en el principal foco de vulnerabilidad política y comunicacional para el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, los datos muestran un amplio respaldo ciudadano a políticas que permitan ordenar las materias migratorias y a medidas asociadas al fortalecimiento del control fronterizo. En este contexto, la migración se mantiene como uno de los temas donde las posiciones del Ejecutivo encuentran mayor sintonía con las preferencias predominantes de la opinión pública.

ALERTA CONCEPTUAL

RESISTENCIA ESTRATÉGICA: VETO DE FACTO Y AUTORÍA DIFUSA

En la izquierda chilena ha comenzado a circular la expresión “resistencia estratégica” en boca de diferentes actores. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, definió con ella el momento político durante el XI Pleno del Comité Central de abril de 2026, orientándolo, en sus propias palabras, a “impedir la consolidación del proyecto de la derecha”⁶. Meses antes, el académico Álvaro Ramis la formuló como misión tras el ciclo electoral, sosteniendo que “preservar organización y vínculos territoriales es ya una forma de resistencia estratégica”⁷. En febrero de 2026, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, en el video titulado: “(...) sobre la maduración de la izquierda y la resistencia estratégica”, desarrolló la idea de la “resistencia con inteligencia”, entendida como la intención de evitar retrocesos en materia de derechos sociales por medio de la formación de un frente común por sobre las diferencias personales en la izquierda⁸. El concepto de resistencia estratégica se desarrolla en distintos sectores de la izquierda, pero orientado hacia una finalidad común: entorpecer la actividad del oficialismo.

En materias legislativas, la resistencia estratégica combina la oposición explícita con el consentimiento táctico. Es decir, algunas iniciativas se enfrentan mediante el rechazo abierto, mientras otras se aprueban formalmente para posteriormente neutralizar sus efectos desde dentro del propio proceso institucional. A diferencia de la oposición tradicional, orientada a la alternancia, esta lógica apunta a restringir la acción efectiva del Ejecutivo. Su autoría se distribuye en decisiones menores, cuyo efecto agregado es significativo, pero cuya responsabilidad es difusa. Opera con conocimiento del proceso legislativo, consciente del costo reputacional de un bloqueo abierto. Es la combinación de una intención declarada de neutralizar la agenda sin ofrecer un proyecto alternativo.

Malu Gatto, académica de Oxford dedicada a los estudios latinoamericanos, explica este patrón al mostrar cómo los legisladores consienten reformas en lo formal para luego mitigar su efecto mediante mecanismos técnicos del propio proceso legislativo⁹. El contexto político del Congreso fragmentado, sumado a una agenda gubernamental ambiciosa, configuran el escenario donde esta lógica encuentra terreno fértil al producir no parálisis, sino condiciones para una forma de poder que se ejerce silenciosamente. Las primeras semanas de tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional exhiben ya sus efectos en lo burocrático/administrativo, con “miles de indicaciones” y llamados al Tribunal Constitucional.

Esta forma de acción política no se sostiene únicamente en la voluntad de quienes la ejercen, sino que requiere una estructura institucional que la haga posible. Esa estructura se encuentra en la figura del colegislador, habitualmente concebido como contrapeso democrático y una expresión de soberanía compartida. Pero que, en un sistema presidencialista con un Congreso fragmentado, su rol formal de

⁶ Lautaro Carmona, conclusiones del XI Pleno del Comité Central del PC, presentadas en ampliados territoriales (Santiago, Linares, Chillán, Concepción) y difundidas vía Radio Nuevo Mundo, abril de 2026. Disponible en pcc Chile.cl.

⁷ Álvaro Ramis, “A pesar de la derrota, persistir con inteligencia,” columna publicada en el sitio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (academia.cl), 15 de diciembre de 2025.

⁸ Caminando por el desierto. Gazmuri sobre la maduración de la izquierda y la resistencia estratégica. En www.youtube.com.

⁹ Malu A. C. Gatto, *Resistance to Gender Quotas in Latin America*, Oxford University Press, 2025 (open access). El concepto de “resistencia estratégica” se desarrolla en el capítulo 2 (“Consented defeat. A theory of strategic resistance to gender quotas”).

distribuir la decisión acuña una segunda naturaleza: habilita un veto descentralizado. El colegislador puede entonces consolidarse como una infraestructura permanente de resistencia que condiciona de forma sistemática la acción gubernamental al reducir la capacidad efectiva del Estado para ejecutar. Esta facultad erosiona la efectividad del régimen político sin generar mecanismos claros de *accountability* sobre quienes producen el bloqueo. Lo que se debilita no es un gobierno determinado sino el principio de mandato sobre el cual descansa la alternancia.

El Ejecutivo asume el costo político directo de cada iniciativa mientras la oposición, dispersa entre múltiples actores, no se hace responsable por sus actos. En el agregado, esto debilita el principio de mandato, porque el electorado vota un programa, pero este se estanca y entrapa en un sistema que no logra cumplir su función de colegislador. Además, la responsabilidad se diluye en una autoría colectiva difícil de atribuir. Enfrentar esta estrategia exige que las medidas de la oposición se visibilicen: quién pone cuántas indicaciones, en qué tiempos y con qué efecto sobre cada iniciativa. Mientras esa información permanezca dispersa, la resistencia estratégica opera sin costo reputacional para quienes la ejercen y el ciudadano solo ve un gobierno que no cumple, sin poder identificar a quienes impiden que cumpla.

Lo anterior no es un problema exclusivo de este Gobierno, sino un riesgo para la calidad de la democracia chilena. Levitsky y Ziblatt observan que hay deterioro democrático cuando se normaliza el abandono de la “moderación institucional”: la regla no escrita de no usar toda herramienta disponible para bloquear al adversario¹⁰. Una oposición que recurre sistemáticamente a indicaciones masivas, requerimientos al Tribunal Constitucional y dilaciones procedimentales, no para deliberar, sino para neutralizar, erosiona exactamente esa norma. Cuando los ciudadanos perciben una brecha entre el rendimiento esperado y lo efectivo de sus instituciones, la desafección crece¹¹. En Chile, donde el Latinobarómetro registra niveles de confianza en el Congreso y los partidos entre los más bajos de América Latina¹², la resistencia estratégica aleja al ciudadano de la política como mecanismo legítimo. Las democracias no se sostienen solo en sus reglas formales, sino en la disposición ciudadana a reconocerlas como capaces de resolver los conflictos políticos. Así mueren las democracias contemporáneas, advierten Huntington, Levitsky y Ziblatt¹³, no por colapso institucional, sino por el desgaste de las normas que las sostienen.

¹⁰ Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, Crown, 2018, pp. 97–117.

¹¹ Pippa Norris, *Democratic Deficit*, Cambridge University Press, 2011, pp. 4–19.

¹² Latinobarómetro, Informe 2024. Disponible en www.latinobarometro.org

¹³ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991, esp. cap. 6.